

## 6.3

# LA INTERVENCIÓN PENITENCIARIA CON LOS PENADOS POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA

**Mercedes Gallizo Llamas**

Directora General de Instituciones Penitenciarias



## 1.- Introducción

La violencia de género constituye una lacra social que remueve la conciencia de la sociedad y afecta al corazón de las relaciones entre los hombres y las mujeres. En un mundo tan distinto y distante del que vivieron nuestros padres o abuelos, incomprensiblemente, se mantiene el viejo machismo como lo vivieron las anteriores generaciones. La posesión, los celos, la no aceptación del fracaso de la pareja o de la independencia de la mujer están en la base de la violencia brutal que continúan sufriendo muchas mujeres.

Tenemos incluso la sensación de que hay, no sólo un goteo incesante de casos de violencia, sino un cierto incremento de la misma, o de la crueldad con la que se produce, a pesar de los importantes esfuerzos que desde todos los sectores sociales se están realizando para atajarla. No es ajeno a esta sensación, el morbo con el que se difunden estos casos y el espacio que ocupan en los cada vez más numerosos programas de sucesos de los medios de comunicación, que no siempre funciona como vacuna.

La persistencia de este problema, su gravedad y su extensión revelan que nos encontramos ante una cuestión de profundas raíces, que no es fácil de prevenir, porque no siempre encontramos indicadores que nos avisen de que el combinado machismo-violencia se está produciendo en una pareja y que hay que abordar desde una acción integral.

Una respuesta integral de intervención sobre este problema social requiere abordar acciones preventivas, educadoras y culturales, de protección a la víctima, y medidas también de tratamiento penal y psicológico del agresor para evitar su reincidencia.

La ley de protección integral contra la violencia de género ha supuesto un hito muy importante. Tal y como se señala en su preámbulo se ha concebido como un instrumento jurídico necesario para acometer el problema de violencia sobre la mujer en su integridad, dando respuestas a las múltiples situaciones que se plantean tanto en los ámbitos educativos, sanitario, laboral, de seguridad social, servicios legales como de reformas de normativa, sustantiva y procesal, penal y civil.

Como también sucede en otros ámbitos de la delincuencia, la actual política criminal respecto a los agresores ha conllevado un aumento de las penas y del recurso a la prisión. El mayor rigor en la aplicación de la ley suele identificarse como un mayor recurso al encarcelamiento. Así se ha hecho también en este caso. Estamos educados de esta manera y parece difícil en el corto plazo cambiar esa mentalidad. Como ejemplo, señalaremos, por lo que a nuestro ámbito concierne, que si en el 2002 el total de reclusos por delitos contra las relaciones familiares era de 78, en el año 2005 esa cifra, tras las reformas legislativas que han extendido estos tipos penales, es de 812 internos, lo que supone un incremento del 941% en 3 años. Evidentemente este aumento es muy superior si tenemos en cuenta todos los delitos por violencia de género.

Evidentemente el castigo tiene un efecto disuasorio. Pero no se debe confiar en la eficacia del castigo por sí solo, o que el aumento de la penalidad, sino desarrollamos acciones complementarias, suponga necesariamente una disminución del índice de reincidencia. Numerosos estudios criminológicos ponen en cuestión que se produzca esa relación positiva. Debemos tener en cuenta en este ámbito no solo la finalidad de prevención general de la pena, intentando desanimar a potenciales delincuentes de la realización del delito bajo la amenaza de la imposición de un castigo, sino también la finalidad de prevención especial, a lo que nos obliga la Constitución al señalar como uno de los fines de las penas la reinserción, interviniendo sobre la conducta del agresor para que no la repita en el futuro. Esta atención hacia los fines de prevención especial no solo está justificada en un mandato legal, sino también en razones de eficacia.

La ley de violencia de género contempla, por primera vez, la necesidad de intervenir con agresores, como garantía para la prevención de futuros delitos. En concreto en su Art.42 establece la obligatoriedad de que las personas condenadas por la comisión de un delito de violencia de género se sometan a un tratamiento especializado durante su periodo de internamiento, y que la evolución en este tratamiento se tenga en cuenta a la hora de acceder a los beneficios penitenciarios.

Además de estos programas con internos presos, se contempla también la intervención terapéutica con agresores en los supuestos de aplicación de medidas alternativas.. Concretamente el Art. 33, de la ley, que modifica el 83.1.6º del código Penal, establece para el caso de la suspensión de condena que si se trata de delitos relacionados con violencia de género, el Juez o Tribunal condicionará en todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1º, 2º y 5, dentro de los cuales se encuentran la realización de programas formativos. Por su parte el Art. 35 de la Ley, que modifica el Art. 88.1 del C Penal, prevé la posibilidad de sustitución de la pena de prisión en estos delitos por la de trabajos en beneficio de la comunidad, disponiendo que, en estos casos, se imponga adicionalmente a la suspensión programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico.

Estas medidas han de ser seguidas necesariamente por los servicios sociales penitenciarios, tal y como establece el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.

La preocupación por la terapia y rehabilitación del agresor sólo ha cobrado interés muy recientemente, y no sin cierta polémica social. Se discute por ciertos sectores la eficacia de estos tratamientos, que presentan evidentemente su grado de dificultad. No nos engañamos respecto de esto. A pesar de ello, no es menos cierto que estas terapias pueden ser eficaces, y de lo que no existe duda, como ponen de manifiesto quienes han analizado el tema en profundidad, es que el riesgo de reincidencia es siempre menor en aquellos penados que han seguido un programa de tratamiento respecto de los que no lo han seguido. La mera segregación social, internando al agresor en prisión, no sirve por sí sola más que para solucionar temporalmente el problema, pero no nos da respuesta a que sucede con este tipo de personas cuando salen de aquella.

Los programas de educación y tratamiento psicológico con los agresores, en los supuestos de suspensión o sustitución de la condena, se incorporaron por primera vez en el Código penal de 1995. Como sucede en tantas ocasiones, las previsiones legales no fueron acompañadas de las previsiones económicas para su puesta en funcionamiento. Salvo en raras excepciones, no ha existido una oferta social adecuada para la realización de estos programas.

En mayo del 2005 se aprobó el Real Decreto 515/2005 que regula las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. En su art. 18 establece que la Administración Penitenciaria se encargará de buscar los tratamientos o programas que se consideren necesarios para complementar la suspensión o sustitución de la pena. La Administración Penitenciaria está realizando un importante esfuerzo para que estos programas puedan llevarse a cabo, bien disponiendo de recursos comunitarios, bien utilizando nuestros propios efectivos. Pero no es tarea fácil poner en marcha estos recursos en todas las Comunidades, en todas las provincias, con medios propios en un momento en que el sistema penitenciario está saturado. Necesitamos la colaboración institucional y social en esta tarea como en tantas otras.

Desde la Dirección General venimos observando que, pese a la generosa colaboración que algunas organizaciones nos vienen prestando en el tratamiento de los agresores por violencia doméstica o de género -entre las que podemos citar a la Xunta de Galicia, con la que estamos en tramite de formalizar un Convenio de colaboración, Asociación AMIKECO, Universidad Complutense de Madrid, Asociación RETO de la Rioja, Fundación para la Reinserción Social del Gobierno de Baleares, etc.-, son pocos los recursos sociales que se disponen para este fin. Ante la escasez de recursos, es equivocado pensar que hay que desarrollar una atención básicamente a las víctimas y olvidar que la atención a los agresores exige movilizar también los recursos presupuestarios y personales necesarios.

Y ello por una razón fundamental. Como saben quienes trabajan en este tema, son muchas las mujeres que vuelven con sus agresores. Son varias las causas que explican este hecho –baja autoestima, esperanza de cambio, justificaciones irracionales, carencia de recursos- y en las que no podemos entrar pormenorizadamente aquí. Lo cierto es que desde nuestra Administración observamos que algunas mujeres insisten en poder comunicar con sus agresores pese a la existencia de órdenes de alejamiento, por ejemplo, y que no son infrecuentes las peticiones a los órganos administrativos o al Juez de Vigilancia de permisos de salida bajo el argumento de que él ya ha cambiado, de que sus hijos lo necesitan y otras argumentaciones similares. Además, aunque no se reanuden las relaciones afectivas con la víctima, estas personas pueden reanudar relaciones con otras mujeres. Si no se trabaja con los agresores terapéuticamente, estas situaciones se reproducirán porque, como ya dijimos antes, la privación de libertad por si misma nada modifica. Tiene un efecto de alejamiento temporal de la víctima y de la sociedad que no hay que minimizar. Pero hay que pensar en lo que sucederá cuando finalice la condena. De ahí que desde la Administración penitenciaria defendamos la necesidad de la intervención con las personas condenadas por este tipo de delitos como medida más eficaz para evitar agresiones futuras.

Tal y como se nos ha solicitado por los Organizadores del Congreso, expondremos a continuación cuales han sido los pasos dados por esta Administración Penitenciaria para implantar los programas de Tratamiento a penados por delitos de violencia de género que se encuentran cumpliendo en prisión, y cuales son las características principales de este programa.

## 2.- Perfil sociocriminológico del agresor.

Comenzamos señalando el perfil sociocriminológico del agresor por violencia domestica o de género que se encuentra en prisión:

- Hombres, casi en su totalidad.
- Edad, entre 40 y 60 años.
- Estado Civil más frecuente es el de casado.
- Sin antecedentes penales.
- Condenados por delitos contra las personas.
- Las víctimas, por este orden, los hijos y las mujeres con las que conviven.
- Penados.
- Clasificados en 2º grado de tratamiento.
- Conducta penitenciaria adaptada.
- Actividad laboral no cualificada y con carácter temporal.
- Familia de origen normalizada, aunque presenta desestructuración o disfuncionalidad en un porcentaje importante.
- Familia adquirida desestructurada o disfuncional.

- Proceso de maduración normalizado.
- Es frecuente un historial de consumo de drogas o/y alcohol.
- No asume la responsabilidad delictiva, utilizando de fuertes mecanismos autoexculpatorios como la culpabilización de la víctima, la negación de los hechos o minimización de los mismos, racionalizaciones, simulaciones y otras.

### 3.- Perfil de delitos y víctimas

Respecto a la víctimas, este sería el cuadro de tipología delictiva y clases de víctimas en el 2005.

Victimas	Total	Contra la libertad sexual	Contra la vida	Contra la integridad física
Hijos	29.8	63.6	10.7	11.4
Mujeres	27.3	8.7	34.5	45.8
Madres	2.7	0	5.6	1
Padres	12.6	0.9	19.7	18.7
Hermanos	6	4	7	10.4
Otros familiares	12.2	13.9	13.4	5.2
Otros	9.3	8.7	9	7.2

### 4.- Descripción del programa de tratamiento

El tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar es un programa específico, pautado y promovido por la D.G.I.P, a tenor de lo dispuesto en el art. 116.4 R.P. Se dirige a todos aquellos internos que hayan protagonizado hechos, reiterados o puntuales, de violencia de género y que voluntariamente lo soliciten. A pesar de la denominación amplia del programa, hay que aclarar que en este momento se ocupa principalmente de la violencia que algunos hombres dirigen hacia mujeres con las que mantuvieron un vínculo afectivo.

Es una actividad necesaria que responde a la obligación que tiene la Administración Penitenciaria de orientar el cumplimiento de la pena hacia la reeducación y reinserción social del interno (Art. 25.2 de la C.E.).

Es una actividad psicoterapéutica. No consiste en programas de información o educación. Por ello los encargados de dirigirla son psicólogos y psicólogas pertenecientes al Cuerpo Superior de Técnicos de II.PP. En algunos casos otros profesionales, básicamente educadores, con la titulación en psicología pueden actuar también como terapeutas. Es muy recomendable que los terapeutas sean de ambos sexos.



Es un tratamiento grupal. El número máximo de internos por grupo no es superior a doce. Las sesiones tienen una duración mínima de dos horas, aunque lo habitual es que alcancen las cuatro, y una frecuencia semanal. En algunos centros se realizan dos sesiones por semana.

Es una intervención semiestructurada. Responde a un esquema claro y fijo, dividido en 11 unidades de tratamiento y cada una de ellas precisa de un número variable de sesiones para alcanzar los objetivos mínimos previstos.

Es un programa prolongado y de largo alcance. Probablemente nos enfrentamos a uno de los colectivos más resistentes al tratamiento. Esto no quiere decir que los resultados sean necesariamente peores que con otros grupos. Sin embargo hace que sea del todo insuficiente una actividad de tipo educativo o de mera transmisión de información. Se estima que serán necesarios doce meses para completar el programa de tratamiento.

Es una actividad exigente. Se critica a veces desde ciertos sectores la realización de programas de reinserción con agresores, quizás porque se teme que aquellos, una vez más, manipulen esta situación en su beneficio, consiguiendo con la adhesión formal en los programas unas ventajas penales. Tenemos que corregir esa visión desde aquí. El programa plantea una intervención psicológica seria y profunda, que exige al interno confrontar su habitual manera de actuar y entender parte de la realidad que tenía claramente estructurada, lo que comporta un dolor psicológico nada desdeñable.

## 5.- Implantación y desarrollo del programa

En el año 2002, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias encargó al profesor Enrique Echeburúa, Catedrático de Psicología de la Universidad del País Vasco, el diseño de un “programa piloto de tratamiento para agresores en el ámbito familiar”. La intervención se realizó en 8 establecimientos y no tuvo continuidad.

La actual Administración penitenciaria quiso reformar la intervención con este tipo de delinquentes al hacernos cargo de la gestión. Para ello se constituyó un grupo de trabajo, firmado por 6 psicólogos del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias, a fin de que se evaluara la anterior experiencia y se propusieran mejoras en los aspectos en que aquélla había resultado deficitaria, quedando concluido este trabajo en el plazo de tres meses.

A partir de ese momento, comenzó la implantación y desarrollo del programa de tratamiento, que se desarrolló del siguiente modo:

**Selección de Centros.** El programa fue ofertado a aquellos establecimientos que habían participado en el mismo en el año 2002 -Alicante I, Valladolid, Palma de Mallorca, Lugo-Bonxe, Tenerife y Albolote- que aceptaron integrarse en el mismo.

Posteriormente se amplió la oferta a otros 14 Centros entre aquellos que habían solicitado participar en el programa y tenían un número de internos susceptibles de integrar los grupos de terapia. Estos Centros fueron: Bilbao, San Sebastián, Huelva, Almería, Sevilla, Ibiza, Madrid II, Madrid IV, Ocaña I, Cuenca, Valencia, Alicante II, Murcia y Orense.

Evaluación externa del programa. Se formalizó un convenio de colaboración entre la DGIP y la Universidad del País Vasco para que el Profesor Echeburúa, se encargara del diseño y realización de la valoración de la intervención. Para ello seleccionó una serie de herramientas de evaluación psicológica que junto a las seleccionadas por un Grupo de Trabajo, se aplicarían a los internos participantes antes y después del tratamiento

Preparación, diseño y desarrollo de la formación de profesionales. El propio Grupo de Trabajo se encargó de diseñar e impartir el curso de formación destinado a los nuevos terapeutas, que se celebró en el mes de octubre de 2004. El curso fue eminentemente práctico e incluía además la participación de otros profesionales externos.

Selección de internos. Finalizada la fase formativa, los terapeutas procedieron a ofertar a los internos de sus centros la participación en el tratamiento. A los que respondieron favorablemente les realizaron una extensa entrevista inicial, cuyos resultados fueron remitidos a la coordinación del programa en los Servicios Centrales. El número total de internos inicialmente participantes fue de 168, distribuidos del siguiente modo:

C.P. Bilbao 10	C.P. Cuenca 6
C.P. San Sebastián 5	C.P. Valladolid 10
C.P. Huelva 11	C.P. Valencia 15
C.P. Almería 7	C.P. Alicante I 6
C.P. Sevilla 9	C.P. Alicante II 9
C.P. Albolote 14	C.P. Murcia 5 + 5 (2 grupos)
C.P. Ibiza 6	C.P. Orense 10
C.P. Mallorca 10	C.P. Lugo-Bonxe 7
C.P. Madrid II 11	C.P. Tenerife 5
C.P. Ocaña I 7	

Reunión de trabajo sobre evaluación. En febrero de 2005 se celebró una reunión de trabajo a la que asistieron todos los terapeutas del programa. Y en la que se presentaron las técnicas de evaluación a ser utilizadas y se establecieron los procedimientos y plazos temporales de entrega.

### Implantación del programa.

Establecidas las técnicas de evaluación, se pasó a desarrollar el programa. Hay que señalar que la aplicación del tratamiento se desarrolla con apenas incidencias significativas, más allá de las dificultades de la propia terapia.

En el momento actual la aplicación de las unidades de intervención ha finalizado en algunos centros, aunque se estima que no será hasta finales de febrero cuando finalicen los programas en la totalidad de los establecimientos. Según vayan finalizando el tratamiento, los terapeutas realizarán la segunda evaluación de internos y se analizarán los resultados.

Hay que señalar que dos de los centros que han finalizado la intervención, realizaban dos sesiones semanales, han formado un nuevo grupo de tratamiento.

Por otra parte, al menos cuatro establecimientos penitenciarios distintos de los iniciales han comenzado el tratamiento de forma paralela, una vez que les fue remitida la documentación necesaria (Madrid V, Alcázar de San Juan, Badajoz, y Segovia). Otros cinco centros más intervienen de algún modo con agresores de género (Dueso, Herrera de la Mancha, Pamplona, Soria y Córdoba), bien con programa propio o con la colaboración de asociaciones, con un total de 80 internos en los programas. Así pues, en total ha sido tratados 244 internos.

## 6.- Comentario final

En la intervención realizada en el año 2002 el índice de abandonos del programa fue muy reducido, cerca del 5%. Su duración apenas superaba los seis meses en su totalidad.

El porcentaje de bajas en el programa actual es significativamente mayor (alrededor del 25%). Este dato no debe interpretarse necesariamente como alarmante puesto que es semejante al que se obtiene en cualquier intervención de largo alcance. Aunque no se ha realizado aún un análisis de este dato, se pueden aventurar algunas explicaciones. En primer lugar la duración del tratamiento actual, en su fase de terapia, es superior a los doce meses, en algunos casos llegará a los 14 meses. Algunos internos simplemente han causado baja por excarcelación. En segundo lugar, este tratamiento es más exigente que el anterior y por ello más amenazador, en términos psicoemocionales, para el participante. Y en tercer lugar el porcentaje de bajas no es similar en todos los grupos, puede darse algún tipo de efecto contagio entre sus componentes.

Sí que resulta preocupante la dificultad encontrada en algunos establecimientos para conseguir formar grupos de al menos 10 internos. Por ello debemos intentar mejorar el índice de participación, tarea que no es sencilla puesto que muchos internos consideran que participar en un programa les traerá consecuencias indeseables. Por ejemplo no concesión de permisos o tercer grado hasta que no finalice el tratamiento (cuanto menos), “dolor psicológico” por remover el pasado, etiquetamiento como maltratador, etc.



Finalmente, aún pendientes de la evaluación de este programa en su nueva formulación, podemos señalar aquí que los internos participantes en la aplicación del programa del 2002, presentaron tras la finalización del mismo:

- Cambios en el ámbito de las distorsiones cognitivas.
- Mayor grado de estabilidad emocional.
- Mayor control de los impulsos.
- Percepción del mundo más ajustada.